



Informe de desempeño social 2023

Migrantes y desplazados

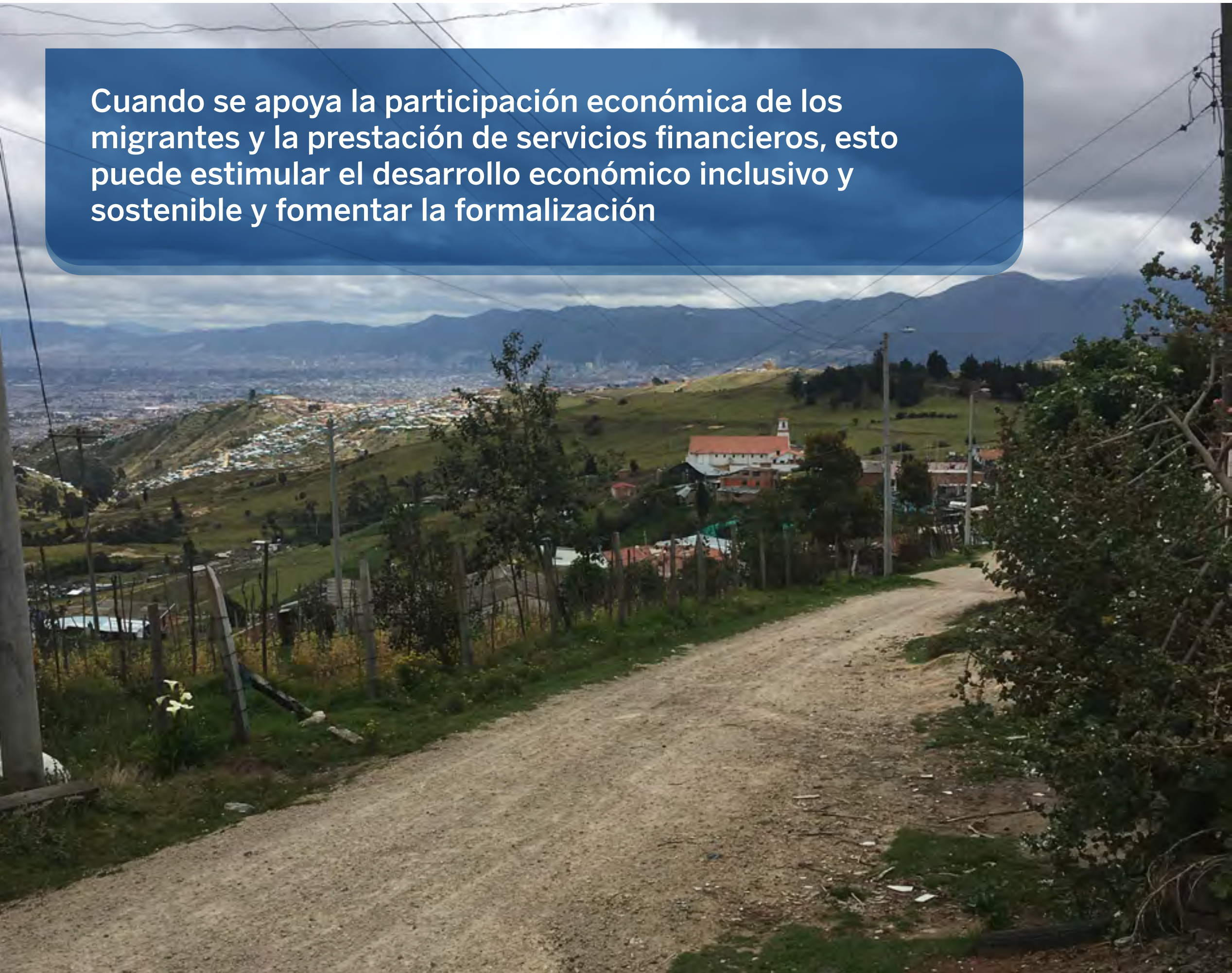


Refugiados y migrantes en búsqueda de esperanza

Al recorrer cualquier capital de los países en los que operan las instituciones de la Fundación Microfinanzas BBVA, en medio del bullicio se entrelazan distintos acentos, donde comienza a destacar uno en particular: evoca al Caribe y se repite cada vez más con mayor intensidad en cada de esas ciudades. En sus calles se esconden historias de migrantes, narrativas que trazan caminos de esperanza y desafíos insospechados, tratando de equilibrar sueños y realidades en una danza constante entre la nostalgia de lo dejado atrás y la promesa de lo que está por venir.

Hemos sido testigos de un flujo migratorio notable en las últimas décadas, con millones de personas moviéndose dentro de la región y hacia otros países en busca de mejores oportunidades económicas, seguridad y calidad de vida. Estos movimientos poblacionales han generado una serie de impactos significativos en los países de origen, tránsito y destino, que abarcan aspectos económicos, sociales, culturales y políticos.

Muchos de estos migrantes se han visto obligados a desplazarse, lo que implica que en la mayoría de los casos lo han hecho de manera irregular e insegura. Las personas que migran para escapar de situaciones de crisis o contextos frágiles, como buena parte de los recientes migrantes de la Región, tienen asimismo muchas más probabilidades de caer en la indigencia a su llegada al país de destino o durante el tránsito, lo que supone una carga para los recursos de bienestar social.



Cuando se apoya la participación económica de los migrantes y la prestación de servicios financieros, esto puede estimular el desarrollo económico inclusivo y sostenible y fomentar la formalización

En 2022, había más de 43 millones de latinoamericanos viviendo fuera de sus países de origen, A esto se suma que la región enfrenta la crisis de desplazamiento más grande de la historia de las Américas, donde los venezolanos, con su mayoritario acento caribeño, son hoy los principales protagonistas. En la actualidad, alrededor de 7,7 millones de refugiados y migrantes de Venezuela se encuentran fuera de su país de origen, unos 6,5 millones (84%) están acogidos en países de América Latina y el Caribe

Utilizando cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, se estima que entre 2013 y 2019, período de mayor flujo de migrantes, el PIB de Venezuela disminuyó alrededor del 63%, la mayor caída en los últimos 50 años para un país que no está en guerra. Todo ello en un entorno hiperinflacionario que hizo, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que más del 90% de la población venezolana se encontrara en situación de pobreza y un 75% en pobreza extrema. La imagen desde 2013 es la de una población buscando cubrir las necesidades más básicas en medio de fuertes racionamientos, en un entorno de tensiones sociales con represión y falta de derechos humanos básicos, que ya habían comenzado con anterioridad.

Desde el colapso de la economía en 2017, los migrantes provienen de hogares de bajos ingresos con un nivel educativo inferior

Las características de los migrantes venezolanos ha ido cambiando en el tiempo. La primera ola estuvo constituida principalmente por profesionales con un nivel educativo superior. La segunda, por jóvenes de clase media con titulación universitaria. Desde el colapso de la economía en 2017, los migrantes provienen de hogares de bajos ingresos con un nivel educativo inferior.

El perfil demográfico de los migrantes venezolanos es similar al de la población local de los países de acogida. Casi dos tercios están en edad de trabajar, y casi la mitad son mujeres. Los migrantes venezolanos enfrentan un mayor desempleo, tienen más probabilidades de trabajar en el sector informal inicialmente, y ganan menos que los trabajadores locales, generando presiones a la baja sobre los salarios en el sector informal.

No cabe duda que la gestión de las migraciones venezolanas representa un desafío considerable para los gobiernos y las instituciones regionales. Es fundamental garantizar la protección de los derechos humanos de todos los migrantes y promover políticas que faciliten su integración social y económica en los países receptores. Esto incluye la implementación de programas de regularización migratoria, la expansión de servicios de atención y la sensibilización pública sobre la contribución positiva de los migrantes a la sociedad, así como la posibilidad que se integren en el día a día de las actividades mediante la regulación y acceso a las fuentes de financiación para llevar actividades por cuenta propia.

A pesar de los esfuerzos de los países de acogida para regularizar e integrar a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, más del 67% de estas personas siguen teniendo dificultades para acceder a alimentos, vivienda, servicios médicos, educación y empleo formal en América.

El reciente Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA) para 2023 muestra que muchas personas refugiadas y migrantes de Venezuela en la región carecen de medios de subsistencia estables, lo que dificulta su integración efectiva y su contribución a las comunidades de acogida, a pesar de los niveles de capital humano que poseen.

Aunque más del 60% de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela tienen documentos, esto no ha sido suficiente para garantizar una vida digna y un acceso adecuado a los derechos básicos.

Muchos ellos lo construyen a través del emprendimiento, como una alternativa de superación y crecimiento personal, permitiendo en muchos casos, poner en valor las habilidades y capital humano que el mercado de los países de destino no les reconoce. Esto es particularmente relevante sobre todo para las personas que migran de manera no voluntaria, como es el caso de la mayoría de los venezolanos, y que se han visto obligados a empezar desde cero.

La inclusión financiera: elemento esencial para avanzar

Los migrantes no pueden llevar a cabo sus emprendimientos o desarrollar todo su potencial debido a las limitaciones que afrontan en los países y las comunidades de tránsito y de destino, sin tener acceso a fuentes de financiación propias o de terceros. Muchos de ellos han tenido experiencia en operar en el sistema financiero en su país de origen. De hecho, en Venezuela, según datos del Global Findex para 2021, el 84% de los adultos tienen experiencia en el sistema financiero, y en 2017 lo tenía el 73%.

Ambas ratios son superiores a la media de los países de destino y se ha casi duplicado en Venezuela desde 2011. El proceso de hiperinflación provocó que disminuyera drásticamente el uso del efectivo y eso impulsó la utilización del sistema financiero a través de opciones digitales para realizar los pagos. Esto hace que en líneas generales tengan una educación financiera superior a la media de la población similar en los países de destino.

Los servicios financieros ofrecen herramientas esenciales a las personas desplazadas por la fuerza. Estas herramientas, cuando se diseñan adecuadamente y están respaldadas por

políticas y regulaciones, ayudan a los migrantes a ahorrar dinero de manera segura, enviar o recibir transferencias de dinero y crear un historial de transacciones que les ayuda a acceder a servicios como crédito y seguros cuando sea necesario.

En ciertos casos, los migrantes son profesionales altamente calificados o fueron dueños de negocios exitosos antes de ser desplazados. Pueden ser tanto empleados como empleadores con experiencias y un segmento de clientes rentable para el sector privado, cuando tengan las condiciones legales para poder operar con el sistema financiero.

El Grupo FMBBVA atendía con créditos a más de 17.951 migrantes y refugiados con sus familias, a través de programas e iniciativas especializadas

Cuando se apoya la participación económica de los migrantes y la prestación de servicios financieros, esto puede estimular el desarrollo económico inclusivo y sostenible y fomentar la formalización. Para ello, es esencial una colaboración más estrecha entre las partes interesadas en la inclusión financiera y las que promueven la participación económica.

Las intervenciones que fomenten la inclusión financiera de los migrantes deben mantener una visión integral que permita superar las distintas barreras a las cuales se enfrentan. Esa aproximación es la que tienen las distintas entidades de la Fundación Microfinanzas en cada uno de los países donde operan, donde en línea con su propósito, presta especial atención a estos colectivos, apoyándolos mediante la inclusión financiera y el fomento de sus pequeños emprendimientos, que promueven su desarrollo y bienestar.

Al cierre de 2023, Bancamía (Colombia), Financiera Confianza (Perú), Fondo Esperanza (Chile) y Microserfin (Panamá) atendían a más de 17.951, migrantes y refugiados con sus familias, a través de programas e iniciativas especializadas.

Colombia

Colombia ha sido uno de los principales destinos para los venezolanos debido a su proximidad geográfica y políticas migratorias relativamente abiertas. Los venezolanos que llegan a Colombia presentan una diversidad de perfiles, que van desde profesionales altamente cualificados hasta trabajadores informales y personas en situación de vulnerabilidad. Muchos venezolanos se han establecido en ciudades como Bogotá, Cúcuta, Medellín y Barranquilla, donde buscan integrarse en la sociedad colombiana y contribuir a la economía local.

Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Colombia alberga a una de las comunidades de migrantes venezolanos más grandes del mundo. Se estima que más de 2,8 millones de venezolanos han llegado a Colombia desde 2015.

En este recorrido, Bancamía fue el primer banco del país en permitir a los migrantes venezolanos abrir un producto financiero con documentos temporales. La entidad comenzó por cuentas de ahorro, que acompañaban de mecanismos sencillos de inversión como los certificados de depósitos a término. Luego dieron acceso a créditos para ir avanzando en sus emprendimientos y este año pusieron a disposición el portafolio de microseguros, con los cuales se pretende derribar barreras entre ellos y el sector financiero.

Para atender a esta población migrantes hay que hacer frente a importantes retos que comienzan desde la documentación básica de identificación, el desconocimiento de su pasado financiero y para el otorgamiento de créditos, confirmar su decidida vocación de permanencia.

A photograph of a woman with curly hair, wearing a colorful patterned top, smiling as she works at a sewing machine. The machine is white and blue. In the background, there are shelves with various items, including a blue container and some fabric. A blue semi-transparent box with white text is overlaid on the right side of the image.

Bancamía fue el primer banco del país en permitir a los migrantes venezolanos abrir un producto financiero con documentos temporales

En Bancamía resolvió el problema de la identificación, vinculándolos con su pasaporte y luego con un documento temporal denominado “permiso especial de permanencia”, posteriormente la legislación colombiana permitió vincularlos al menos con alguno de estos dos, y desde el año 2021, mediante el “Estatuto Temporal de Protección” se creó el PPT (Permiso de Protección Temporal), ofreciéndoles así la oportunidad de acceder a muchos más servicios y garantizando todos sus derechos en el territorio colombiano

En ese sentido, se ha construido una hoja de ruta que ha permitido, identificar sus necesidades y trabajar a partir de sus realidades, para ayudarles a progresar a ellos y también a las comunidades de acogida. En ese camino hemos contado con importantes aliados como IFC, entidad con la que se firmó un acuerdo en 2020 para desarrollar la oferta de valor para el segmento de migrantes venezolanos, especialmente mujeres, con el objetivo de ayudarlos a integrarse con éxito a las dinámicas sociales y económicas del país.

Esto se hizo en 4 etapas: la primera se definió como “Conociendo la voz del cliente”, mediante la cual se identificaron necesidades y se desarrollaron distintos arquetipos, se identificaron las fortalezas y oportunidades internas para desplegar la oferta de valor, luego se aproximó la oferta de valor para los arquetipos seleccionados y, finalmente se creó el producto mínimo viable, para apoyar a estos colectivos. Este acuerdo facilitó la implementación

de herramientas de acercamiento que permitieron conocer las necesidades, desafíos, preferencias, experiencias y aspiraciones de los migrantes en todo lo referente al uso de servicios financieros.

Adicionalmente se han creado alianzas con USAID y DFC (Corporación Financiera de Desarrollo Internacional) del Gobierno de los Estados Unidos, en un modelo de garantías que permiten respaldar los créditos de esta población.

En 2018 se puso en marcha el programa Emprendimientos Productivos para la Paz, (Empropaz), junto a USAID, para impulsar la inclusión financiera en condiciones especiales y formación para la creación de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento empresarial en 92 municipios afectados por la violencia y la pobreza. En 2020 este programa se amplió a 21 municipios con mayor inmigración para atender a la población migrante venezolana, colombianos retornados y comunidades de acogida.

El programa Empropaz ha atendido a más de 200.000 personas en estos territorios, 59% mujeres, entre los que se encuentran desplazados y víctimas del conflicto interno, permitiéndoles acceder a productos y servicios financieros y formación especializada. Esta misma oferta está disponible para la población venezolana, y hoy cuenta con 4.441 migrantes vinculados al programa.

De esta forma, a nivel nacional, hoy Bancamía atiende a 8.367 migrantes venezolanos, 55% mujeres y 10% en zonas rurales, que mantienen más de 10.500 productos al cierre de 2023. El 96% de ellos tienen cuentas de ahorro (8.101), el 32% tienen créditos (2.713), con una cartera vigente que supera los 2,6 millones de dólares, y el 26% (2.171) cuentan con microseguros voluntarios (incluyen salud, vida, daños, eventos climáticos, exequias, entre otros) de gran impacto. El 80% de los que poseen créditos tienen un seguro voluntario.

Muchos venezolanos trabajan en el sector informal, realizando actividades como vendedores ambulantes, trabajadores domésticos, conductores de transporte informal, actividades de peluquería, salones de belleza, venta de comida, tiendas y elaboración de postres, entre otros. También se encuentran en sectores como la agricultura, la hostelería y el transporte.

Bancamía atiende a 8.367 migrantes venezolanos, 55% mujeres y 10% en zonas rurales, que mantienen más de 10.500 productos al cierre de 2023

Perú

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú, se estima que más de 1,54 millones de venezolanos ingresaron al país desde el inicio de la crisis en Venezuela en 2015 hasta fines de 2023. La mayoría de los migrantes venezolanos en Perú son jóvenes adultos entre 18 y 35 años, aunque también hay familias enteras y personas mayores. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) de Perú, alrededor del 52% de los migrantes venezolanos son mujeres y el 48%, hombres.

Aproximadamente un 64% de la población migrante que reside en el país tiene permiso migratorio. El 33,6% cuenta con carné de extranjería; un 17,8%, con carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP); un 8,9%, con Documento Nacional de Identidad (DNI) y un 3,8% cuenta con Permiso Temporal de Permanencia (PTP) vigente o vencido.

Alrededor del 36% de los venezolanos migrantes no cuentan con un permiso migratorio, haciendo muy compleja su inserción al mercado laboral formal e inclusive, al informal.

Si bien muchos migrantes venezolanos se concentran en Lima, la capital del país, también se han establecido en otras regiones de Perú. Ciudades como Arequipa, Trujillo, Cusco y Tacna también han experimentado un aumento en la población venezolana.

Por categoría de ocupación se observa que el 64,4% de la población refugiada y migrante de Venezuela en el Perú que trabaja se desempeña como empleado u obrero, el 29,3% como trabajador independiente, el 4% como trabajador del hogar y el 1,3% se desempeña como empleador o patrono.

Los migrantes venezolanos en Perú trabajan en una variedad de sectores económicos. El 55,0% lo hace en el sector de servicios; 24,3%, comercio; 12,7%, manufactura; 7,2%, construcción y 0,8%, en agricultura, pesca o minería. Muchos trabajan en empleos informales o temporales debido a las barreras para acceder al mercado laboral formal.

Según el Ministerio de Educación de Perú, se estima que alrededor del 60% de los niños y adolescentes venezolanos en edad escolar asisten a la escuela en Perú. El gobierno peruano ha implementado programas para facilitar la incorporación de estudiantes venezolanos al sistema educativo. El gobierno peruano ha ampliado el acceso de los migrantes venezolanos a servicios de salud básicos a través del Seguro Integral de Salud (SIS). Esto ha permitido que muchos venezolanos accedan a atención médica gratuita o a bajo costo en centros de salud y hospitales públicos.



Al cierre de 2023, FC atendió a 5.297 migrantes venezolanos, con más de 8.079 productos

Perú ha implementado programas de regularización migratoria para brindar estatus legal a los migrantes venezolanos que residen en el país de manera irregular. Esto les permite acceder a empleo formal, servicios sociales y protección legal.

Del total de venezolanos mayores de 14 años que permanecen en el país, el 45,1% declara estar trabajando, el 37,2% no trabaja y el 17,7% no proporcionó información sobre su situación laboral. En el comparativo según sexo se observa que el 51,4% de los hombres declara tener un trabajo y son mayores en 13,4 puntos porcentuales que la misma población en mujeres; asimismo, el 29,5% de la población masculina declara no estar trabajando y es menor en 16,4 puntos porcentuales respecto a la población femenina.

De aquellos que declararon su situación laboral y trabajan, el 55,2% tiene estudios secundarios completos. Los que tienen estudios superiores completos representan el 20% del total, del mismo modo que el 10,7% posee estudios técnicos completos. Por otra parte, los que poseen estudios secundarios incompletos, el grupo que declara tener un trabajo representa el 14,1% del total.

Estos datos proporcionan una visión general de la situación de los migrantes venezolanos en Perú, destacando su contribución a la economía y la sociedad peruana, así como los desafíos que enfrentan en términos de integración y acceso a servicios básicos. En ese contexto, su inclusión

social y un proceso de acogida adecuado, implica, en primer lugar, identificar las necesidades específicas de la población migrante, abordando los sesgos en el proceso.

Financiera Confianza (FC), gracias a las siete alianzas estratégicas centradas exclusivamente en población migrante venezolana, ha podido fortalecer su oferta de valor y su mirada integral del migrante construyendo formas de entenderlo. Es una de las primeras financieras en trabajar con población migrante, y sobre todo, en ofrecerles un amplio abanico de productos 100% digitales y servicios *ad hoc* teniendo en cuenta sus necesidades y características.

Al cierre de 2023, FC atendió a 5.297 migrantes venezolanos, con más de 8.079 productos. El 98% de ellos tienen cuentas de ahorro (5.206), el 28% tienen créditos (1.497) y el 26% (1.376) cuentan con microseguros voluntarios. El 91% de los que poseen créditos tienen un seguro voluntario.

La estrategia de trabajo parte del análisis de necesidades, por lo que el trabajo de FC con la población migrante ha permitido entender cómo las diversas situaciones de vulnerabilidad y carencias que enfrentan afectan a su inclusión económica, y de manera más integral, a su

inclusión social. Por este motivo la entidad utiliza el ahorro como estrategia de entrada, sobre todo, porque la mayoría de clientes o potenciales clientes migrantes no están bancarizados. Este año, las cuentas de ahorro confianza 100% digitales han destacado en su preferencia, y a nivel nacional, por su innovación y capacidad de contribuir al cierre de brechas.

Además de la inclusión financiera, FC reconoce la importancia de la diversidad y de inclusión social y laboral de la población migrante y desplazada. Por este motivo, y en alianza con organizaciones de base y entidades que promueven la inclusión laboral, FC cuenta con 6 colaboradores migrantes, con gran aporte y contribución a la comprensión de las necesidades reales, espacios de comunicación, y deseos de la población migrante y desplazada.

Aún hay mucho camino por recorrer para lograr una verdadera y plena inclusión financiera de la población migrante y desplazada en el país. Por eso desde FC se participa de manera activa en espacios de concertación, discusión y diálogo, tanto con el sector público como privado, para generar los cambios necesarios en las políticas y en los procesos relativos a la población migrante y desplazada.

Es una de las primeras financieras en trabajar con población migrante, y sobre todo, en ofrecerles un amplio abanico de productos 100% digitales y servicios *ad hoc* teniendo en cuenta sus necesidades y características.

Chile

Según el Departamento de Extranjería y Migración de Chile, se estima que más de 532.715 venezolanos ingresaron al país desde el inicio de la crisis en Venezuela en 2015 hasta fines de 2022. Esta cifra representa el 33% del total de migrantes en Chile, duplicando el peso del segundo país, que es Perú.

La población venezolana en Chile es diversa en cuanto a edad y género. Se compone de personas jóvenes, familias enteras y adultos mayores. El 80% de los venezolanos que tienen hijos viven con ellos, mostrando que es una comunidad con mayor intención de permanencia que otros colectivos. Solo un 13% vive en hogares unipersonales.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, alrededor del 55% de los venezolanos que residen en Chile son hombres y el 45% son mujeres. Cerca del 71% de los migrantes en edad de trabajar se concentra en el tramo de 18-39 años.

El modo del financiamiento del viaje define puntos de partida diferentes en términos de integración. Aquellos que han apalancado su traslado tendrán mayores dificultades para recomenzar. El 77% de los venezolanos señalan que hicieron uso principalmente de recursos propios en origen para financiar su traslado, por lo que están en mejores condiciones.

La mayoría de los migrantes venezolanos en Chile se concentran en la Región Metropolitana de Santiago,

especialmente en la capital, Santiago. Sin embargo, también se han establecido comunidades venezolanas en otras ciudades importantes como Antofagasta, Valparaíso y Concepción.

Los migrantes venezolanos en Chile trabajan en diferentes sectores económicos. Muchos se desempeñan en el sector servicios, incluyendo restaurantes, hotelería, retail y salud. Otros trabajan en construcción, minería, tecnología, educación o se dedican al emprendimiento.

El 64,6% de los venezolanos muestran una educación superior completa. El 30,8% tiene educación secundaria completa, siendo de los grupos migrantes los que tienen el mayor nivel educativo. El 47,4% de los venezolanos con educación superior completa lo han hecho en ingeniería o carreras tecnológicas; sin embargo, solo el 10% ha convalidado sus títulos.

Alrededor del 79% de los trabajadores migrantes venezolanos se encuentra empleado como asalariado y el 18% lo hace por cuenta propia. Hay una brecha de 25 p.p respecto al desempeño de sus profesiones en Venezuela versus en Chile, estando muchos en trabajos no asociados a su formación y la mayoría haciendo actividades por cuenta propia que tienen como principal limitación el acceso a los servicios financieros en el país de destino.



En este sentido, Fondo Esperanza atiende a 4.264 migrantes que en su totalidad tienen acceso a créditos por un monto de 2,75 millones de dólares, comenzando muchos de ellos a obtener microseguros que completan su oferta de valor. Al no ser una entidad regulada, no tiene opción a ofrecer instrumentos de ahorros a este colectivo.

Panamá

Según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá se estima que más de 162.000 venezolanos han llegado al país desde el inicio de la crisis en Venezuela en 2015, para residir en él, mientras que aproximadamente 328.000 migrantes venezolanos irregulares transitaron por el país rumbo al norte del continente hasta fines de 2023.

Panamá ha implementado programas de regularización migratoria para brindar estatus legal a los migrantes venezolanos que residen en el país de manera irregular. Esto les permite acceder a empleo formal, servicios sociales y protección legal.

La población venezolana en Panamá es diversa en cuanto a edad y género. Se compone de personas jóvenes, familias enteras y adultos mayores. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá, aproximadamente el 53% de los venezolanos que residen en Panamá son hombres y el 47% son mujeres.



Los migrantes venezolanos en Panamá se concentran principalmente en la Ciudad de Panamá y la provincia de Panamá Oeste, donde se encuentran la mayoría de las oportunidades laborales y servicios. Sin embargo, también se han establecido comunidades venezolanas en otras áreas urbanas y rurales del país.

Los migrantes venezolanos trabajan en diferentes sectores económicos. Muchos se desempeñan en el sector servicios, incluyendo restaurantes, hotelería, comercio minorista y atención al cliente. Otros trabajan en construcción, banca, tecnología, educación y emprendimiento.

Algunos migrantes venezolanos en Panamá han optado por iniciar sus propios negocios o emprendimientos, aprovechando sus habilidades y experiencia para establecerse en el mercado local. Se pueden encontrar restaurantes, cafeterías, tiendas de ropa, servicios profesionales y otros negocios propiedad de venezolanos en todo el país.

Microserfin es la única entidad en Panamá que atiende a personas con estatus de refugiados o solicitantes de refugio, gracias a una alianza que tiene en marcha con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Cruz Roja Panameña

En este sentido, Microserfin, la entidad panameña de la FMBBVA, apoya a los migrantes venezolanos mediante un crédito individual destinado a atender a los refugiados dueños de microempresas con un nivel mínimo de formalidad que requieren suplir necesidades de capital trabajo, inversión o ambas para ampliar o mejorar la gestión de sus actividades.

Microserfin mantiene un compromiso con este colectivo desde hace más de diez años siendo la única entidad en Panamá que atiende a personas con estatus de refugiados o solicitantes de refugio, gracias a una alianza que tiene en marcha con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Cruz Roja Panameña.

El programa de Inclusión financiera para refugiados permite a estas personas que han sido forzadas a huir de sus países producto de la violencia, la guerra o la persecución, acceder a servicios financieros, no financieros, acompañamiento y una oferta de valor pensada en sus necesidades, que potencien su integración socioeconómica en Panamá.

Gracias a esta alianza estratégica, Microserfin hasta el cierre del 2023 ha desembolsado más de 200.000 dólares a refugiados ofreciéndoles la oportunidad de tener una vida crediticia en el país e invertir en sus negocios para su crecimiento y la mejora de sus condiciones de vida.

Para fortalecer esta línea de atención, en 2023 la entidad fortaleció sus alianzas para multiplicar el impacto en este colectivo con la firma de un Memorándum de Entendimiento junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, que establece un marco general de colaboración entre ambas instituciones y con el cual se prevé, de cara a los próximos años, propiciar la máxima cooperación entre las partes a fin de facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y asimismo impulsar la colaboración e identificación de programas y/o proyectos de interés común que fomenten la integración socioeconómica de las personas migrantes.

Los migrantes venezolanos en Panamá se concentran principalmente en la Ciudad de Panamá y la provincia de Panamá Oeste